

«RIT»

Foja: 1

FOJA: 57 .- .-

NOMENCLATURA : 1. [40] Sentencia
JUZGADO : 17º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-8868-2021
CARATULADO : SALAMANCA/FISCO DE CHILE / CONSEJO DE
DEFENSA DEL ESTADO

Santiago, treinta de agosto de dos mil veinticuatro

VISTOS:

Con fecha 8 de noviembre de 2021, a través de presentación ingresada por oficina judicial virtual, comparece doña Julia Urquieta Olivares, abogada, en representación de **Patricio Escalona Arriagada**, chileno, casado, jubilado, cédula nacional de identidad N° 5.744.550-5; **Luis Onolfo Escalona Arriagada**, chileno, casado, jubilado, cédula nacional de identidad N° 7.202.245-9, **Segundo Nicanor Campillay Sepúlveda**, chileno casado, pensionado, cédula nacional de identidad N° 7.847.877-2, **Carlos Campillay Sepúlveda**, chileno, soltero cédula nacional de identidad N° 7.079.873-5, **Roberto Del Tránsito Romero Veliz**, casado, jubilado, cédula nacional de identidad N° 6.817.623-9; y de **Vladimir Max Salamanca Morales**, chileno, casado, profesor, cédula nacional de identidad N° 8.358.525-0, todos domiciliados para estos efectos en calle San Pio X, N° 2460, Oficina 702, comuna de Providencia, Región Metropolitana, quien interpone demanda de indemnización de perjuicios en contra del **Fisco de Chile**, representado por don Juan Antonio Peribonio Poduje, en su calidad de Presidente del Consejo de Defensa del Estado, ambos domiciliados en calle Agustinas N° 1225, piso 4 comuna de Santiago.

Funda su demanda en ser un hecho de público conocimiento que el 11 de septiembre de 1973 tomó el poder un régimen de facto que se extendería por casi 17 años, caracterizado por una situación de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos, violencia política, jurídica y social de la que fueron víctimas cientos de miles de personas, represión, de tipo genocida, que tenía por objetivo preciso el de exterminar a grupos nacionales segregados políticamente, cuya identidad se funda en sus aspiraciones y creencias políticas.

Añade que, tras varios días de resistencia, la fuerza represiva se desplegó con fuerza contra la Legua. El 16 de septiembre de 1973 se realizó un masivo allanamiento que terminó con centenares de detenidos, otros tantos golpeados y torturados. Posteriormente, nuevas detenciones, fusilamientos, allanamientos y amenazas intentaron terminar con todo tipo de organización y acción de los pobladores.

Seguidamente precisa que entre el 12 y el 13 de septiembre se habilitó el Estadio Nacional como campo de “prisioneros de guerra”, el que llegaría a ser el centro de detención más grande que existió en la Región Metropolitana, llegando a tener unos 7.000 detenidos al día 22 de septiembre, según estimación de la Cruz Roja Internacional. De ese número, la misma fuente estima que entre 200 a 300, eran extranjeros de



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XKSXPXJHXR

Foja: 1

diversas nacionalidades. Este lugar estaba al mando de un Oficial del Ejército, y hasta allí fueron trasladadas personas provenientes de todos los lugares de Santiago, detenidas en circunstancias y con características muy diversas, teniendo evidencia de la práctica de torturas y malos tratos a los detenidos del Estadio Nacional, por ejemplo, en el recinto de la enfermería que en algunas oportunidades se utilizó para esos fines; también se sabe de simulacros de fusilamiento y otros métodos inhumanos. En general, los detenidos eran sometidos a constantes e intensos interrogatorios.

Bajo el título de antecedentes de hecho específicos de los demandantes, dice que a la fecha de los hechos todos los demandantes residían en la Población “La Legua”, y fueron detenidos en el contexto de una redada masiva que realizan fuerzas militares y de Carabineros que ingresan a la Población el día 16 de septiembre de 1973, después de varios días de resistencia, por lo que fueron tratados con especial violencia por los militares durante su detención, traslado e interrogatorios, permaneciendo algunos de ellos meses privados de libertad en el Estadio Nacional y en otros recintos de detención.

Según relatan los demandantes fueron sacados a la fuerza desde sus domicilios, con las manos en alto y los apuntaron con metralletas y tanques en las afuera de sus casas junto a todos sus vecinos, mujeres, hombres, niños, embarazadas, a todos les pegaban culatazos y les cortaron el pelo con las bayonetas, a todos los dejaron sangrando, realizando con todos ellos simulacro de fusilamiento, delante de sus hijos y mujeres y gritaban ante el terror de lo que estaba sucediendo al ver cómo los torturaban, diciendo que los matarían delante de sus familias, eran muchos los vecinos todos de la misma cuadra, posteriormente todos ellos fueron llevaron en camiones, sangrando por las torturas y lo golpes.

El allanamiento en la población comenzó al amanecer y duró aproximadamente hasta mediodía, luego los llevaron a la base aérea El Bosque de la Fuerza Aérea, permaneciendo en el lugar hasta las 22 horas, momento en el cual les tomaron algunos datos personales y posteriormente fueron trasladados a las micros en las cuales habían llegado, los amenazaban que iban a ser llevados a los pozos areneros ubicados en la Castrina y que en ese lugar serían fusilados. Después de alrededor de 30 o 40 minutos llegaron hasta la puerta principal del Estadio Nacional, mientras que soldados y civiles los amenazaban y golpeaban con las armas que portaban.

Al llegar al Estadio Nacional una nueva larga fila los esperaba, esta vez de carabineros, los golpeó y los amenazó violentamente y los condujo hasta la puerta que da a la cancha principal del Estadio. Producto de los culatazos todos sufrieron lesiones, fracturas y pérdida de piezas dentales, también presenciaron la ejecución en la pista atlética de la cancha, el asesinato y fusilamiento de dos jóvenes, uno de ellos fue rematado por carabineros, los devolvieron cerca de la entrada principal y les tomaron algunos datos personales y los hicieron nuevamente correr por el interior del



Foja: 1

estadio nacional en otro callejón oscuro formado esta vez por soldados del ejército, los ubicaron en un camarín donde se preparan los equipos de fútbol en el sector norte del estadio muy cerca del camarín principal y del túnel que conduce a los equipos de fútbol a la cancha, eran alrededor de 50 vecinos todos varones permaneciendo en ese lugar desde el domingo 16 hasta el día jueves o viernes siguiente y luego son trasladados hasta el túnel que conduce a la cancha, en ese lugar habían más detenidos que eran campesinos de Buin y Paine.

Prácticamente no había alimentación, no disponían de abrigos y debían soportar el frío y además permanecer de pie en el túnel.

Sigue, que a la segunda semana fueron trasladados dentro del Estadio Nacional y en la cuarta semana de detención fueron llevados de madrugada al velódromo del Estadio Nacional siendo separados en grupos de 8 a 10 prisioneros, conducidos ante un civil sentado frente a una máquina de escribir y otro que los interrogaba sobre antecedentes de la organización política de la población, siendo objeto de torturas a través de golpes y corriente en tobillos y muñecas. Durante todo ese día no se les permitió ir a los baños y tampoco se les dio alimento. así las golpizas iniciales a las que siguieron la aplicación de tormentos más sofisticados aplicados durante el interrogatorio les dejaron secuelas físicas y psicológicas.

Añade que el Estado de Chile, de mutuo propio, ha reconocido su responsabilidad en estos hechos en forma expresa a través del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación donde queda constancia de la sistematicidad de las graves violaciones a los derechos humanos y la represión en la Región Metropolitana y en específico de la comisión de torturas y otros crímenes de lesa humanidad cometidos en el Estadio Nacional.

Con respecto al daño producido, expresa que de acuerdo al cuestionario para Trauma de Harvard, y en el marco de los objetivos del Protocolo de Estambul, los actos que sus representados afirman haber sido sometidos son constitutivos de tortura, a saber: secuestro; golpes en diferentes partes del cuerpo; simulacros de fusilamiento, privación de alimentos y agua; privación de sueño; separación forzada de los miembros de su familia; testigo de la tortura a otros; amenaza de muerte; insultos y humillación constante; privación de libertad sin cargos por meses, exposición a condiciones antihigiénicas que conllevan enfermedades; citando posteriormente informes y jurisprudencia.

Argumenta que la responsabilidad del Estado en la Constitución Política vigente, tratándose de graves violaciones a los derechos fundamentales de la demandante, el estatuto normativo que regula la responsabilidad extracontractual del Estado, se encuentra contenido en los artículos, 5º, 6º, 7º, 19 N° 2º y 38º de la Constitución Política de la República; artículos 4 y 44 de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional sobre Bases de la Administración del Estado, extendiéndose por expresa



Foja: 1

disposición del inciso segundo del artículo 5 de la Constitución Política, a los convenios o tratados internacionales ratificados por Chile, a los principios generales del derecho internacional y al derecho consuetudinario internacional.

Postula que los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República establecen los principios de igualdad ante la ley de gobernantes y gobernados, siendo responsables tanto de sus acciones como de sus omisiones, asimismo, el artículo 4 de la Ley N° 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado, señala que este será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado. Estatuto normativo que atendido el carácter de violaciones a derechos fundamentales de los hechos que fundan la demanda, deben necesariamente ser complementadas con los tratados internacionales vigentes en Chile y que el deber de responder y resarcir los daños consecuencia de la prisión ilegal y tortura se encuentra establecido en la “Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes” (Convención contra la Tortura); la “Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura”, la “Convención Americana de Derechos Humanos” y el “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, todas las cuales prohíben de manera absoluta la práctica de la tortura bajo cualquier circunstancia o motivo.

Previas citas legales, pide se tenga por interpuesta demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, acogerla a tramitación y, en definitiva, aceptarla en todas sus partes declarando que el demandado deberá pagar a cada uno de los demandantes, a título de indemnización de perjuicios por daño moral, la suma de \$150.000.000.- (ciento cincuenta millones de pesos), suma que deberá ser pagada con reajustes de acuerdo al IPC e intereses legales desde la fecha de la sentencia que la declare, ya sea esta de primera o segunda instancia, hasta su completo pago, o en su defecto el monto indemnizatorio el Tribunal estime ajustado a equidad y al mérito de autos; todo con costas.

Según estampado receptorial de folio 6, consta haberse notificado personalmente la demanda, el día 26 de enero de 2022.

A través de presentación ingresada el 16 de febrero de 2022 a folio 7, comparece doña Ruth Israel López, Abogada Procuradora Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile, quien contestó la demanda solicitando su rechazo conforme a los argumentos que expone.

Tras efectuar un resumen de la demanda, opuso con respecto a los demandantes don Patricio Escalona Arriagada y don Luis Onolfo Escalona Arriagada, la excepción de cosa juzgada, por existir sentencia definitiva ejecutoriada en la materia, quienes, junto a numerosos demandantes, dedujeron demanda civil en contra del Fisco de Chile ante el 14° Juzgado



Foja: 1

Civil de Santiago, Rol C-1890-2006, caratulados “Salgado Salgado y Otros con Fisco de Chile”, sobre indemnización de perjuicios. Concurriendo para ellos, la misma parte, causa de pedir y objeto pedido, por los apremios ilegítimos que sufrieron.

Alega que aquella demanda civil, por sentencia definitiva de 5 de julio de 2011, que acogió la excepción de prescripción deducida por el Fisco de Chile, sentencia que fue confirmada por la Iltna. Corte de Apelaciones de Santiago, rol ICA-7649-2011 de fecha 10 de enero de 2014, y que luego la Excma. Corte Suprema con fecha 19 de noviembre de 2014, rol CS-7888-2014, rechazó el recurso de casación en el fondo deducido, encontrándose firme y ejecutoriada.

En cuanto al derecho, funda la excepción en los artículos 175 y 177 del Código de Procedimiento Civil. Hay identidad legal de personas, pues los actores figuran como demandantes civiles en ambos procesos; siendo, además, el Fisco de Chile el demandado en ambos juicios, coincidiendo tanto la identidad física como legal-procesal de ambas partes, con respecto a los demandados referidos; en cuanto a la identidad legal de cosa pedida, siendo la indemnización por daño moral por responsabilidad civil extracontractual objetiva e imprescriptible del Fisco de Chile, lo demandado en ambos procesos; y, respecto de la causa de pedir, es el delito por los apremios ilegítimos o torturas, que habrían sufrido en manos de agentes del Estado.

En subsidio a la excepción de cosa juzgada deducida respecto de don Patricio Escalona Arriagada y don Luis Onolfo Escalona Arriagada y como primera excepción respecto del resto de los demandantes, opuso la excepción de reparación integral, alegando la improcedencia de la indemnización alegada por haber sido ya indemnizados los demandantes, indicando que no resulta posible comprender el régimen jurídico de las reparaciones por infracciones a los Derechos Humanos sino se posicionan correctamente estas indemnizaciones en el panorama jurídico nacional e internacional.

En efecto, continúa, dicha comprensión sólo puede efectuarse al interior -y desde- lo que ya es común considerar, el ámbito de la llamada Justicia Transicional. Sólo desde esa óptica puede mirarse en mejores condiciones los valores e intereses en juego en esta disputa indemnizatoria.

Agrega que el denominado dilema "justicia versus paz" es, sin lugar a dudas, uno de los pilares sobre los cuales descansa el edificio de aquella justicia transicional. Argumentos en favor de amnistías generales que porten la necesaria tranquilidad a un país, deben lidiar con la imperiosa necesidad de que una sociedad se mire a sí misma y reconozca los errores del pasado para así pronunciar aquel imperioso "nunca más". En esta perspectiva, las transiciones son, y han sido siempre, medidas de síntesis mediante las cuales



Foja: 1

determinadas sociedades, en específicos momentos históricos, definen las proporciones de sacrificio de los bienes en juego al interior de aquel profundo dilema. Por otro lado, manifiesta que no debe olvidarse que, desde la perspectiva de las víctimas, la reparación de los daños sufridos juega un rol protagónico en el reconocimiento de aquella medida de justicia por tantos años buscada. Mal que mal el éxito de los procesos penales se concentra sólo en el castigo a los culpables no preocupándose del bienestar de las víctimas. En este sentido, las negociaciones entre el Estado y las víctimas revelan que tras toda reparación existe una compleja decisión de mover recursos económicos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas, a la satisfacción de otras radicadas en grupos humanos más específicos. Este concurso de intereses o medida de síntesis se exhibe normalmente en la diversidad de contenidos que las comisiones de verdad o reconciliación proponen como programas de reparación.

Señala que estos programas incluyen beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero. En este sentido, no es un secreto que las transiciones han estado, en todos los países que las han llevado a cabo, basadas en complejas negociaciones. Basta para ello revisar someramente las discusiones originadas en la aprobación de la Ley N° 19.123 para darse cuenta del cúmulo de sensibilidades e intereses en juego en ellas. Asevera que no debe extrañar que muchas de esas negociaciones privilegien a algunos grupos en desmedro de otros cuyos intereses se estiman más lejanos, se compensen algunos daños y se excluyan otros o se fijen legalmente, luego de un consenso público, montos, medios de pago o medidas de daño.

Seguidamente, expone sobre la complejidad reparatoria. Citando a Lira señala que los objetivos a los cuales se abocó preferentemente el gobierno de don Patricio Aylwin en lo que respecta a la justicia transicional fueron "(a) el establecimiento de la verdad en lo que respecta a las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura; (b) la provisión de reparaciones para los afectados; y (c) el favorecimiento de las condiciones sociales, legales y políticas que prevean que aquellas violaciones puedan volver a producirse".

En lo relacionado con aquel segundo objetivo, la llamada Comisión Verdad y Reconciliación, o también llamada Comisión Rettig, en su Informe Final propuso una serie de "propuestas de reparación" entre las cuales se encontraba una "pensión única de reparación para los familiares directos de las víctimas" y algunas prestaciones de salud. Dicho informe sirvió de causa y justificación al proyecto de ley que el Presidente de la República envió al Congreso y que luego derivaría en la Ley 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. El mensaje de dicho proyecto de ley fue claro al expresar que por él se buscaba, en términos generales, "reparar precisamente el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas".



Refiere que en lo relativo a la forma en que se entendió la idea de reparación, el ejecutivo, siguiendo aquel informe, entendió por reparación “un conjunto de actos que expresen el reconocimiento y la responsabilidad que le cabe al estado en los hechos y circunstancias que son materia de dicho informe”. A dicha reparación ha de ser convocada y concurrir toda la sociedad chilena en un “proceso orientado al reconocimiento de los hechos conforme a la verdad, a la dignificación moral de las víctimas y a la consecución de una mejor calidad de vida para las familias más directamente afectadas”. Compensación de daños morales y mejora patrimonial, son dos claros objetivos de estas normas reparatorias.

Añade que, de esta forma, en la discusión de la Ley N° 19.123 el objetivo indemnizatorio de este grupo de normas quedaría bastante claro. En diversas oportunidades, por ejemplo, se hizo referencia a la reparación moral y patrimonial buscada por el proyecto. La noción de reparación por el dolor de las vidas perdidas es encontrada también en otras tantas ocasiones. También está presente en la discusión la idea de que el proyecto buscaba constituir una iniciativa legal de indemnización y reparación. Incluso se hace expresa referencia a que las sumas de dinero acordadas son para hacer frente la responsabilidad extracontractual del Estado. Así las cosas, esta idea reparatoria se plasmó de manera bastante clara cuando dentro de las funciones de la Comisión se indicó que le corresponderá especialmente a ella promover la reparación del daño moral de las víctimas a que se refiere el artículo 18. Asumida esta idea reparatoria, señala, la Ley N°19.123 y otras normas jurídicas conexas han establecido los diversos mecanismos mediante los cuales se ha concretado esta compensación exhibiendo aquella síntesis que explica cómo nuestro país ha afrontado este complejo proceso de justicia transicional.

En este sentido, indica que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones, a saber: a) Reparaciones mediante transferencias directas de dinero; b) Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y c) Reparaciones simbólicas.

Mediante estos tres tipos de reparaciones se ha concretado el objeto de nuestro particular proceso de justicia transicional, que en lo que a este punto respecta, busca no otra cosa que la precisa reparación moral y patrimonial de las víctimas. Un análisis de estas compensaciones permitirá verificar el ámbito compensatorio que ellas han cubierto.

Bajo el subtítulo “Reparación mediante transferencias directas de dinero”, afirma que diversas han sido las leyes que han establecido este tipo de reparaciones.

Destaca que en la discusión legislativa de estas normas se enfrentaron principalmente dos posiciones. Por un lado, algunos sostenían que la reparación que se iba a entregar debía hacerse a través de una suma única de dinero, mientras otros, abogaban por la entrega de una pensión vitalicia.



Foja: 1

Ello no implicaba de manera alguna que la primera opción tendría efectos indemnizatorios y no así la segunda. Ambas modalidades tendrían fines resarcitorios.

En términos de costos generales para el Estado, este tipo de indemnizaciones ha significado, a diciembre de 2019, en concepto de: a) Pensiones: la suma de \$ 247.751.547.837.- como parte de las asignadas por la Ley 19.123 (Comisión Rettig) y de \$648.871.782.936.- como parte de las asignadas por la Ley 19.992 (Comisión Valech); b) Bonos: la suma de \$41.910.643.367.- asignada por la Ley 19.980 (Comisión Rettig) y de \$23.388.490.737.- por la ya referida Ley 19.992; c) Desahucio (Bono compensatorio): la suma de \$1.464.702.888.- asignada Ley N° 19.123, y; d) Bono Extraordinario (Ley 20.874): la suma de \$23.388.490.737.-, concluyendo que a diciembre de 2019, el Fisco había desembolsado la suma total de \$992.084.910.400.-

Manifiesta que, desde una perspectiva indemnizatoria, una pensión mensual es también una forma de reparar un perjuicio actual y, aunque ella comporte una sucesión de pagos por la vida del beneficiario, ello no obsta a que pueda valorizarse para poder saber cuál fue su impacto compensatorio.

Indica que el cálculo de los efectos indemnizatorios de una pensión vitalicia puede realizarse simplemente sumando las cantidades pagadas a la fecha, como asimismo las mensualidades que todavía quedan por pagar.

Agrega que como puede apreciarse, el impacto indemnizatorio de este tipo de pensiones es bastante alto. Ellas son, como se ha entendido de manera generalizada, una buena manera de concretar las medidas que la justicia transicional exige en estos casos, obteniéndose de ello, compensaciones razonables que están en coherencia con las fijadas por los tribunales en casos de pérdidas culposas de familiares.

Refiere luego, las reparaciones específicas de la Ley N° 19.992 y sus modificaciones. Señala que el actor ha recibido beneficios pecuniarios al amparo de las Leyes N° 19.234, 19.992 y sus modificaciones. La primera de ellas estableció una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones a los derechos humanos individualizados en el anexo “Listado de prisioneros políticos y torturados” de la Nómina de personas Reconocidas como Víctimas. Así, se estableció una pensión anual reajutable de \$1.353.798.- para beneficiarios menores de 70 años; de \$1.480.284.- para beneficiarios de 70 o más años de edad y de \$1.549.422.- para beneficiarios mayores de 75 años de edad. Adicionalmente, el actor recibió en forma reciente el Aporte Único de Reparación Ley N° 20.874, por \$1.000.000.-

Acto seguido, alude a las reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas. Manifiesta que tal como sucede en la mayoría de los procesos de justicia transicional, la reparación se realiza no sólo mediante transferencias monetarias directas, sino que también a través de la concesión de diversos derechos a prestaciones.



Hace ver que se concedió a los beneficiarios tanto de la Ley N° 19.234 como de la Ley N° 19.992, el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en Servicios de Salud del País. Indica que para acceder a estos servicios la persona debe concurrir al hospital o consultorio de salud correspondiente a su domicilio e inscribirse en la correspondiente oficina del PRAIS.

Expresa que además del acceso gratuito a las prestaciones de la red asistencial, PRAIS cuenta con un equipo de salud especializado y multidisciplinario, con atención exclusiva a beneficiarios del programa. Adicionalmente, detalla otros tipos de beneficios a los beneficiarios y sus familias, en particular en el ámbito educacional.

Luego, expresa que, dentro de las reparaciones simbólicas, es importante que, en los procesos de justicia transicional, que la reparación de los daños morales causados a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se realice mediante actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones, no a través de dinero sino mediante una reparación del dolor y tristeza producidos. Evidencia que parte de ello fue la construcción del Memorial del Cementerio General en Santiago del año 1993, el establecimiento mediante el Decreto N° 121, de 2006, del Día Nacional del Detenido Desaparecido, construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, entre otros.

Bajo el subtítulo “identidad de causa entre lo que se pide en estos autos y las reparaciones realizadas”, sostiene que tanto la indemnización que se solicita en autos como el cúmulo de reparaciones antes indicadas pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos, de manera que no procede repararlos nuevamente. Cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema en apoyo de sus argumentos, agregando que órganos internacionales de tanta importancia como la Corte Interamericana de Justicia han valorado positivamente la política de reparación de violaciones de Derechos Humanos desarrollada por Chile, a tal punto que han denegado otro tipo de reparación pecuniaria luego de tomar en consideración los montos ya pagados por el Estado por conceptos de pensiones, beneficios y prestaciones públicas.

Reclama que dar lugar nuevamente a demandas de indemnización de perjuicios, genera inevitablemente un acceso desigual a la justicia y a las reparaciones generando el efecto de debilitar la decisión política y administrativa de la reparación.

Concluye que estando la acción interpuesta de autos basada en los mismos hechos y pretendiendo indemnizar los mismos daños que han inspirado el cúmulo de acciones reparatorias que enunció anteriormente, y de acuerdo con los documentos oficiales que según dice acompañará a los autos, opone la excepción de reparación integral por haber sido ya indemnizada la parte demandante.



Foja: 1

Acto seguido y en forma subsidiaria, alega la prescripción extintiva de la acción de conformidad a los artículos 2332 y 2497 del Código Civil. Hace ver que, conforme al relato efectuado por los demandantes, los hechos que fundan la demanda ocurrieron durante la dictadura militar, a partir del 16 de septiembre de 1973, ha transcurrido en exceso el plazo de 4 años de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2332. Luego, en subsidio de lo anterior, opone excepción de prescripción de 5 años de conformidad a los artículos 2514 y 2515 del Código Civil.

Ahondando en los argumentos que sostienen la prescripción invocada, sostiene que la imprescriptibilidad de las acciones es excepcional, requiriendo siempre una declaración explícita, la que en este caso no existe. Añade que las normas de prescripción se aplican a favor y en contra del Estado. Cita jurisprudencia de la Corte Suprema en apoyo de sus alegaciones.

Por otro lado, expone que los tratados internacionales invocados por la actora no contienen norma alguna que declare imprescriptible la responsabilidad civil, sino únicamente se refieren a la responsabilidad penal, citando jurisprudencia en este sentido.

Finalmente, postula que no existiendo una norma especial que determine qué plazo de prescripción debe aplicarse en estos casos, debe recurrirse al derecho común, esto es, el artículo 2332 del Código Civil, y, en subsidio, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2515, en relación con el artículo 2.514 del Código Civil.

En último término, se refiere al daño e indemnización reclamada, manifestando que el monto pretendido es excesivo, y que, tratándose del daño puramente moral, la finalidad reparatoria no es alcanzable, así como tampoco resulta posible poner a la víctima en el lugar en que se encontraba antes de producirse el daño. Explica que la indemnización del daño moral solo sirve para otorgar a la víctima satisfacción, ayuda o auxilio para atenuar o morigerarlo, y que, en todo caso, deben considerarse los montos promedios fijados por los tribunales, lo que han actuado con prudencia.

En subsidio de las excepciones anteriores, solicita que la regulación del daño moral considere los pagos ya recibidos del Estado y que guarde armonía con los montos establecidos por los Tribunales. Sostiene que se debe considerar todos los pagos recibidos por la actora a través de los años conforme a las leyes de reparación (Leyes 19.123, 19.234 y 19.992, sus modificaciones y demás normas pertinentes), y que seguirá percibiendo a título de pensión, y también los beneficios extrapatrimoniales que estos cuerpos legales contemplan, pues todos ellos tuvieron por objeto reparar el daño moral. Indica que no acceder a esta petición subsidiaria implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.



Foja: 1

Finalmente, hace presente que los reajustes sólo pueden devengarse en el caso de que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación, y además desde que la sentencia se encuentre firme o ejecutoriada. Por otro lado, indica que los intereses se deben sólo cuando el deudor ha sido reconvenido y retardado el cumplimiento de la sentencia.

Mediante presentación de fecha 25 de febrero de 2022 a folio 11, la parte demandante evacuó el trámite de réplica, señalando con respecto a la excepción de cosa juzgada respecto de los demandantes don Patricio Escalona Arriagada y don Luis Onolfo Escalona Arriagada, en lo medular, que la defensa fiscal al oponer esta excepción a las acciones deducidas por víctimas de crímenes de lesa humanidad, basándose en la cosa juzgada derivada de la aplicación de las reglas de prescripción en materia civil, incumple las promesas realizadas por el Estado de Chile, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las que fueron recogidas a través del Consejo de Defensa del Estado, reglas de prescripción aplicación de la prescripción penal que en el juicio penal se declararon prescrita las acciones civiles ejercidas a su respecto, se vuelve a denegar justicia a las víctimas por segunda vez, con la agravante que la defensoría lo hace a sabiendas que la alegación de cosa juzgada de ser aceptada por la Corte Suprema hará incurrir al Estado en infracción a las disposiciones de la Convención Interamericana.

Con respecto a la excepción de Reparación Integral e improcedencia indemnización por haber sido ya indemnizado el demandante, arguye que no existe norma legal alguna que establezca incompatibilidad entre estos beneficios asistenciales o de sobrevivencia, recibidos por las víctimas, y la indemnización que se solicita. Más aún, la propia demandada reconoce que al discutirse las leyes sobre la materia existía la opción de entregar una indemnización consistente en una suma única de dinero y otros que preferían entregar prestaciones sociales. Lo que no dice la demandada es que, en esta discusión, se optó por la segunda opción por ser más económica para el Fisco, dejando a la iniciativa de las víctimas buscar, vía judicial, la reparación de todos los demás daños que se le hubiesen sufrido con ocasión de la violación de sus derechos.

Asimismo, las prestaciones otorgadas por PRAIS, si bien se presenta como un programa especial de salud, es más bien un programa de asistencia social y apoyo psicológico, cuyo propósito o función es derivar al beneficiario al sistema público de salud, atención que no representa ningún gasto especial para el Fisco.

Seguidamente, en relación con la excepción de prescripción extintiva, expone que la contraria sostiene que la prescripción de las acciones de indemnización de perjuicios debe regularse por las normas civiles, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 2332 y en subsidio el artículo 2515 con relación al artículo 2514. Sin embargo sobre el particular, cabe señalar



«RIT»

Foja: 1

que la prescripción alegada por la demandada es inoponible para su parte, toda vez que las reglas invocadas por la demandada - artículo 2332, 2497 y 2515, todas del Código Civil- son inaplicables al caso, por tratarse de una responsabilidad regida por disposiciones de Derecho Público, de rango constitucional, artículos 2º, 4º, 5º, 6º, 7º, 38 de la Constitución Política de la República, 4º y 42 de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de Administración del Estado, por lo que las normas del derecho común que han sido citadas por la demandada no son aplicables en cuanto los hechos en que se funda la presente demanda son constitutivos de un crimen de lesa humanidad, citando posteriormente, abundante jurisprudencia al respecto.

Finalmente refiere con respecto al daño e indemnización reclamada que, su parte no comparte que la indemnización demandada sea excesiva, atendido justamente la extensión del daño, ya que si bien en materia de daño moral la indemnización queda a la prudencia y discrecionalidad del juez, la doctrina a extraído de las numerosas sentencias que se han dictado en esta materia ciertos parámetros o pautas que los jueces consideran para fijar el quantum indemnizatorio del daño moral, agregando que las víctimas han sido objeto de daños patrimoniales y extra patrimoniales. Los primeros han intentado ser reparados mediante una exigua pensión vitalicia. Los segundos nunca han sido considerados en ninguna ley de reparación, con la sola excepción del millón de pesos establecidos en la Ley 20.874.

Para referirse con respecto a la improcedencia del cobro de reajustes e intereses en la forma solicitada, que tanto los reajustes como los intereses deben empezar a computarse desde la fecha de la notificación de la demanda o al menos desde el fallo que establezca la indemnización, sea que éste se pronuncie por un tribunal de primera instancia de segunda o incluso la propia Corte Suprema por vía de casación, siendo innecesario que la sentencia se encuentre ejecutoriada.

Con fecha 10 de marzo de 2022, en folio 14, la parte demandada del Fisco de Chile, evacuó la réplica, ratificando la totalidad de las argumentaciones expresadas en la contestación de la demanda.

Por resolución de fecha 14 de marzo de 2022, a folio 15, con reposición acogida a folio 32, se recibió la causa a prueba por el término legal, rindiéndose la que consta en autos.

Con fecha 13 de diciembre de 2023, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en estos autos, don Patricio Escalona Arriagada, don Luis Onolfo Escalona Arriagada, don Segundo Nicanor Campillay Sepúlveda, don Carlos Campillay Sepúlveda, don Roberto Del Tránsito Romero Veliz, y don Vladimir Max Salamanca Morales, debidamente representados, deducen demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado legalmente por don Juan Antonio Peribonio



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XKSXPXJHXR

Foja: 1

Poduje, todos ya individualizados, a fin de que se condene a este último, al pago de la suma de \$150.000.000.- (ciento cincuenta millones de pesos) a cada uno, por los daños morales sufridos a consecuencia de los hechos de los que fueron víctimas, consistentes principalmente en detenciones ilegales, apremios ilegítimos y torturas, ocurridos con ocasión de sus detenciones los días 16 y 30 de septiembre de 1973, en el Estadio Nacional.

SEGUNDO: Que por su parte el demandado Fisco Chile compareció a la instancia contestando y duplicando la demanda de autos, solicitando en definitiva el rechazo de la demanda en todas sus partes, oponiendo en primer lugar y con respecto a los demandantes don Patricio Escalona Arriagada y don Luis Onolfo Escalona Arriagada, la excepción de cosa juzgada, por haberse deducido una demanda civil de indemnización de perjuicios contra el Fisco de Chile, presentada ante el 14° Juzgado Civil de Santiago, Rol C-1890-2006, con sentencia definitiva que acogió la excepción de prescripción, de fecha 19 de octubre de 2014, que se encuentra firme y ejecutoriada, en subsidio para ellos y principal para el resto de los demandantes, las de reparación integral y la de improcedencia de la indemnización por haber sido ya indemnizados los demandantes. Seguidamente, alega la prescripción extintiva de la acción por haber transcurrido en exceso el plazo de 4 años contemplado en el artículo 2332 del Código Civil cuya aplicación estima procedente, y en subsidio, la prescripción extintiva ordinaria de 5 años, objetando, en subsidio de todo lo anterior, el monto indemnizatorio exigido por el actor a título de daño moral, solicitando que en la regulación de éste se consideren los pagos, pensiones e indemnizaciones que ha recibido la parte demandante.

TERCERO: Que la presente controversia radica en determinar si en la especie concurren los requisitos de la responsabilidad patrimonial del Estado y, en consecuencia, si el Fisco se encuentra obligado a indemnizar el daño moral reclamado por el actor, fundado en la detención ilegal y torturas que experimentó en el contexto político del régimen militar de 1973.

CUARTO: Que, la responsabilidad civil tiene por finalidad reparar económicamente a la víctima o con mayor precisión, compensar el daño sufrido por ésta como consecuencia de un hecho ilícito. En este sentido, lo que se busca es proporcionar a la víctima, una cantidad de dinero que le permita sobrellevar de mejor manera el daño sufrido, mediante el goce y disfrute de otras cosas, atendido el carácter transaccional de éste. En razón de ello, se dice que la indemnización monetaria no es una genuina reparación, pues no hace desaparecer el daño ni mucho menos el hecho generador de éste, sino que más bien, otorga los medios económicos a la víctima para que ésta encuentre satisfacción en la adquisición de bienes o servicios.

QUINTO: Que, en lo concerniente a la responsabilidad del Estado y sus órganos, el principio general expresado anteriormente se ha concretizado



Foja: 1

bajo la institución de la falta de servicio, criterio general de atribución equivalente a la culpa o negligencia que funda la reparación de los daños extracontractuales. De aquí que la doctrina y jurisprudencia, estimen que la responsabilidad civil o patrimonial de los órganos públicos puede ser perseguida, ya sea de acuerdo a las normas de derecho público (Constitución Política de la República, Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, etc.), como a partir de la normativa de derecho privado (artículos 2314 y siguientes del Código Civil).

SEXTO: Que en este sentido si bien en la actualidad, es un lugar común hablar de la unidad de responsabilidades públicas y privadas a fin de garantizar reglas y principios equitativos para los particulares que buscan la reparación de sus daños ocasionados por el Estado, ello no conlleva un desconocimiento de las peculiaridades de las relaciones de derecho público (administrativa, legislativa y judicial), en particular, respecto del complejo contenido y finalidad que el órgano estatal persigue con cada una de sus actuaciones.

SÉPTIMO: Que sin perjuicio de lo anterior, la acción civil aquí deducida en contra del Fisco, tendiente a obtener la reparación íntegra de los perjuicios que han sido ocasionados a los actores, encontrando también su fundamento en los principios generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su consagración normativa en los tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan al Estado chileno a reconocer y proteger este derecho a la reparación íntegra, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5° y en el artículo 6° de la Constitución Política de la República.

Los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, consagran que la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar otros preceptos de derecho interno, pues si se verifica un hecho ilícito imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de una norma de esta índole, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación.

OCTAVO: Que estas normas de rango superior imponen un límite y un deber de actuación a los poderes públicos, y en especial a los Tribunales nacionales, en tanto éstos no pueden interpretar los preceptos de derecho interno de un modo tal que dejen sin aplicación las normas de derecho internacional que consagran este derecho a la reparación, pues ello podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado de Chile.

NOVENO: Que a fin de acreditar lo correspondiente, la parte demandante acompañó los siguientes documentos a la carpeta electrónica: 1. Copia del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Consecuencias de la Prisión Política y Tortura pág. 581- 611. 2. Sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; caso



Foja: 1

Órdenes Guerra y otros vs. Chile- Noviembre de 2018. **3.** Copia Ley 20.874 publicada el 29 de octubre de 2015. otorga un aporte único, de carácter reparatorio las víctimas de prisión política y tortura, reconocidas por el estado de Chile. **3.** Carpetas de antecedentes de los demandantes Patricio Escalona Arriagada, Luis Onolfo Escalona Arriagada, Segundo Nicanor Campillay Sepúlveda, Carlos Campillay Sepúlveda, Roberto Del Tránsito Romero Veliz, Vladimir Max Salamanca Morales. **4.** Evaluación de daño moral, como consecuencia de la tortura y prisión política, en don PATRICIO ESCALONA ARRIAGADA, Rut: 5.744.550-5, efectuada por el Ministerio de Salud, a través del Programa PRAIS. **5.** Evaluación de daño moral, como consecuencia de la tortura y prisión política, en don: LUIS ONOLFO ESCALONA ARRIAGADA, Rut: 7.202.245-9, efectuada por el Ministerio de Salud, a través del Programa PRAIS. **6.** Evaluación de daño moral, como consecuencia de la tortura y prisión política, en don SEGUNDO NICANOR CAMPILLAY SEPÚLVEDA, Rut: 7.847.877-2, realizada por el Psicólogo clínico y Magíster Psicopatología don Rodrigo Adolfo San Martín Gárate. **7.** Evaluación de daño moral, como consecuencia de la tortura y prisión política, en don CARLOS CAMPILLAY SEPÚLVEDA, Rut: 7.079.873-5, realizada por el Psicólogo clínico y Magíster Psicopatología don Rodrigo Adolfo San Martín Gárate. **8.** Evaluación de daño moral, como consecuencia de la tortura y prisión política, en don ROBERTO DEL TRÁNSITO ROMERO VELIZ, Rut 6.817.623-9, efectuada por el Ministerio de Salud, a través del Programa PRAIS. **9.** Evaluación de daño moral, como consecuencia de la tortura y prisión política, en don VLADIMIR MAX SALAMANCA MORALES, Rut: 8.358.525-0, efectuada por el Ministerio de Salud, a través del Programa PRAIS. **10.** Copia de las páginas 524 a 525 del informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, Capítulo VI, “RECINTOS DE DETENCION”. **11.** Sentencia definitiva de primera instancia, dictada en los autos caratulados Martínez/ Fisco de Chile, Rol C -31667-2019 del 9º Juzgado Civil de Santiago.

DÉCIMO: Que, por su lado, la parte demandada acompañó los siguientes documentos a la carpeta electrónica: **a)** Demanda deducida en causa rol C-1890-2006, del 14º Juzgado Civil de Santiago; **b)** Sentencia dictada en causa rol C-1890-2006, del 14º Juzgado Civil de Santiago; **c)** Sentencia complementaria dictada por el mismo Tribunal, con fecha 28 de agosto de 2013. **d)** Sentencia de segunda instancia dictada por la Tercera Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 10 de enero de 2014, rol de ingreso N° Civil-7649-2011. **5.** Sentencia dictada por la Tercera Sala de la Excma. Corte Suprema, con fecha 19 de noviembre de 2014, en ingreso rol N° 7888-2014, que rechaza el recurso de casación en el fondo deducido por los demandados.

UNDÉCIMO: Que por oficio acompañado a folio 12, del Instituto de Previsión Social, el que informa acerca de beneficios de reparación que



«RIT»

Foja: 1

como beneficiarios de las Leyes N° 19.234, 19.992, 20.134 y 20.874 se han otorgado a los actores, y que en síntesis consigna que aquellos, han recibido las siguientes cantidades:

1.- ESCALONA ARRIAGADA, PATRICIO, 5.744.550-5, \$31.918.993.- entre febrero de 2005 a febrero de 2022, más aporte único Ley N° 20.874 por \$1.000.000.- y aguinaldos por \$562.653.- ascendiendo la pensión actual Valech a \$227.186.-

2.- ESCALONA ARRIAGADA, LUIS ONOLFO, 7.202.245-9 \$31.787.985.- entre febrero de 2005 a febrero de 2022, más aporte único Ley N° 20.874 por \$1.000.000.- y aguinaldos por \$562.653.- ascendiendo la pensión actual Valech a \$207.774.-

3.- CAMPILLAY SEPULVEDA, SEGUNDO NICANOR, 7.847.877-2, \$31.787.985.- entre febrero de 2005 a febrero de 2022, más aporte único Ley N° 20.874 por \$1.000.000.- y aguinaldos por \$562.653.- ascendiendo la pensión actual Valech a \$207.774.-

4.- CAMPILLAY SEPULVEDA, CARLOS, 7.079.873-5, \$33.751.083.- entre agosto de 2003 a febrero de 2022, más bono Ley N°19.992 por \$3.000.000, aporte único Ley N° 20.874 por \$1.000.000.- y aguinaldos por \$603.196.- ascendiendo la pensión actual PNC a \$214.590.-

5.- ROMERO VELIZ, ROBERTO DEL TRÁNSITO, 6.817.623-9, \$31.787.985.- entre febrero de 2005 a febrero de 2002 (*sic*), más aporte único Ley N° 20.874 por \$1.000.000.- y aguinaldos por \$562.653.- ascendiendo la pensión actual Valech a \$207.774.-

6.- SALAMANCA MORALES, VLADIMIR MAX, 8.358.525-0, \$31.787.985.- entre febrero de 2005 a febrero de 2022, más aporte único Ley N° 20.874 por \$1.000.000.- y aguinaldos por \$562.653.- ascendiendo la pensión actual Valech a \$207.774.-

DUODÉCIMO: Que, el oficio acompañado a folio 23, correspondiente a respuesta del Instituto Nacional de Derechos Humanos, se informa que Patricio Escalona Arriagada, RUT: 5.744.550-5; Luis Onolfo Escalona Arriagada, RUT: 7.202.245-9; Segundo Nicanor Campillay Sepúlveda, RUT: 7.847.877-2; Carlos Campillay Sepúlveda, RUT: 7.079.973-5; Roberto del Tránsito Romero Véliz, RUT: 6.817.623-9 y Vladimir Salamanca Morales, RUT: 8.358.525-0, aparecen en la nómina de personas reconocidas como víctimas de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura –conocida como Valech I– con los números 7.747, 7.746, 4.104, 4.103, 21.597 y 22.014 del listado respectivamente.

DÉCIMO TERCERO: Que, primeramente cabe asentar que la calidad de los autores en cuanto víctimas de violación a sus derechos humanos no han sido controvertida por el Fisco, sino que por el contrario, aquella puede inferirse de la documental acompañada, en especial del Certificado del Instituto Nacional de Derechos Humanos que remite copia del listado de prisioneros políticos y torturados, elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, establecida por el Decreto



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XKSXPXJHXR

Foja: 1

Supremo N° 1.040 del año 2003 del Ministerio del Interior, conocida como “Comisión Valech I”, en la que consta que los demandantes figuran en la misma con los números 7.747, 7.746, 4.104, 4.103, 21.597 y 22.014, así como de la información emitida por el Instituto de Previsión Social, asociados a los beneficios pecuniarios que los actores han recibido desde el año 2005 a la fecha.

DÉCIMO CUARTO: Que, en consecuencia, al no haber sido controvertidos por la parte demandada y con el mérito de la prueba reseñada precedentemente, de conformidad a lo prescrito por los artículos 1700, 1702 y 1706 del Código Civil, se tiene por acreditado que don Patricio Escalona Arriagada, don Luis Onolfo Escalona Arriagada, don Segundo Nicanor Campillay Sepúlveda, don Carlos Campillay Sepúlveda, don Roberto Del Tránsito Romero Veliz, y don Vladimir Max Salamanca Morales, fueron calificados como víctima de Prisión Política y Tortura por la Comisión Valech I, incluyéndose en la Nómina de Prisioneros Políticos y Torturados Reconocidos por la Comisión bajo los números 7.747, 7.746, 4.104, 4.103, 21.597 y 22.014, recibiendo por ello prestaciones pecuniarias de parte del Estado como se acredita con la información proporcionada por el Instituto de Previsión Social.

Luego, conforme a los antecedentes que obran en la carpeta electrónica, cabe señalar que los relatos de los actores aparecen plausibles y concordantes con las demás probanzas rendidas por aquella, en especial con los relatos que efectuaron ante la Comisión Valech I, entre el 16 de enero de 2004 al 26 de marzo de 2004, así como los informes de evaluación de daño moral, efectuados por el Ministerio de Salud a través del Programa PRAIS y por el sicólogo clínico y Magíster Psicopatología don Rodrigo Adolfo San Martín Gárate, en los cuales describieron:

1.- Don Patricio Escalona Arriagada, que fue detenido el 16 de septiembre de 1973, en su domicilio ubicado en la Población de La Legua por funcionarios militares y de la FACH, pasando por diversos centros de reclusión, en SNS Trudeau, Capitán Ávalos, Estadio Nacional, Chacabuco y Estadio Chile, siendo sujeto de reiterados golpes e interrogaciones, vejaciones como darle orina para beber, limitándolo en la alimentación, aplicación de corriente en dos ocasiones y amenazas a su familia, siendo liberado el 13 de febrero de 1974, estando privado de libertad finalmente 4 meses y 27 días, quedando con secuelas como menor visión en ojo izquierdo, fractura en la nariz y artritis, relatando igualmente una detención practicada en fecha indeterminada de agosto de 1974 por Carabineros.

2.- Don Luis Onolfo Escalona Arriagada, que fue detenido el 16 de septiembre de 1973, en la Población de La Legua por funcionarios militares, pasando por diversos centros de reclusión, en Hospital Barros Lucos, Escuela de Aviación y Estadio Nacional, siendo sujeto de interrogatorios frecuentes con corriente, simulacro de fusilamiento, quemaduras de cigarros, golpizas, quebrándole la mandíbula y pérdida de dientes, así también de



Foja: 1

callejón oscuro y todo con poca alimentación, siendo liberado el 10 de octubre de 1973, estando privado de libertad finalmente 25 días, quedando con secuelas como pérdida de dentadura y visión en ojo derecho, así como problemas en columna vertebral, dolores de cabeza y cicatrices en diferentes partes del cuerpo.

3.- Don Segundo Campillay Sepúlveda, que fue detenido el 30 de septiembre de 1973, a la edad de 17 años, en su domicilio en la Población de La Legua, por funcionarios militares y Carabineros, pasando por diversos centros de reclusión, en Maestranza en calle Salesianos y Estadio Nacional, siendo sujeto de diversos golpes y con poca alimentación, siendo liberado el 15 de octubre de 1973, estando privado de libertad finalmente 15 días.

4.- Don Carlos Campillay Sepúlveda, que fue detenido el 16 de septiembre de 1973, en su domicilio de la Población de La Legua por funcionarios militares y Carabineros, pasando por diversos centros de reclusión, en maestranza calle Salesianos y Estadio Nacional, siendo sujeto de interrogatorios, reiterados golpes de patadas y combos, así como aplicación de corriente eléctrica, siendo liberado el 27 de septiembre de 1973, estando privado de libertad finalmente 11 días, quedando con secuelas psicológicas.

5.- Don Roberto del Tránsito Romero Véliz, que fue detenido el 16 de septiembre de 1973, en su domicilio de la Población de La Legua por funcionarios militares y FACH, pasando por diversos centros de reclusión, en Recinto FACH paradero 6 de Santa Rosa, Base Aérea El Bosque y Estadio Nacional, siendo sujeto de reiterados golpes, callejón oscuro, corriente en diferentes partes del cuerpo, dejándolo incluso semi inconsciente, quedando incomunicado varios días sin ver la luz del día ni teniendo comida, amenazado constantemente de muerte y obligado a firmar un documento que indicaba que estaba de acuerdo con la Junta Militar, siendo liberado el 8 de octubre de 1973, estando privado de libertad finalmente 22 días, quedando con dolor crónico en la espalda, secuelas psicológicas, como depresión, trastornos del sueño, sintiendo que se afectó su personalidad, volviéndose con el tiempo tímido e inseguro.

6.- Don Vladimir Max Salamanca Morales, que fue detenido el 16 de septiembre de 1973, a la edad de 15 años, en su domicilio de la Población de La Legua por funcionarios militares y Carabineros, pasando por diversos centros de reclusión, entre ellos la Base Aérea El Bosque y Estadio Nacional, siendo sujeto de reiterados golpes, callejón oscuro y amenazas de muerte, así como aplicación de corriente eléctrica, siendo liberado el 8 de octubre de 1973, estando privado de libertad finalmente 22 días, relatando igualmente una detención practicada el 25 de enero de 1974 por civiles armados, comandados por la DINA, siendo detenido junto a su padre al Regimiento de Ingenieros de Tejas Verdes, donde sufrió torturas, como aplicación de electricidad, amenazas e interrogatorios dirigidos por Manuel Contreras y el médico Orvieto Teplizky, permaneciendo en total 44 días



Foja: 1

detenidos, regresando a su casa donde comprobó que sus hermanos Ernesto Salamanca Morales y Gerardo Rubilar Morales, habían sido detenidos el 24 de enero en Santiago, encontrándose hasta hoy en calidad de detenidos desaparecidos. Agrega que, a consecuencias de la tortura, sufrió la parálisis del brazo izquierdo, logrando recuperar la movilidad en un 80% aproximadamente, así como el esternón salido. Así también a nivel psicológico, quedó con problemas para dormir, pesadillas y otras secuelas personales y familiares que detalla.

DÉCIMO QUINTO: Que en cuanto al primer supuesto, esto es, la existencia de un hecho antijurídico, conforme a la naturaleza de la materia y hechos sobre los que versa la litis, del mérito de las probanzas reseñadas en los motivos anteriores, ha quedado acreditado que los actores fueron víctimas de detención ilegal, diversos tormentos, vejaciones y formas de tortura, durante la privación de libertad de que fueron objeto, entre el 16 de septiembre y las fechas señaladas en el considerando anterior, consistentes en golpes, amenazas, torturas e incluso aplicación de descargas eléctricas para algunos de los demandantes, condiciones de reclusión paupérrimas, privación de alimentos, entre muchos otros, como se describió en el considerando precedente, destacando que don Segundo Campillay Sepúlveda y don Vladimir Max Salamanca Morales eran menores de edad.

DÉCIMO SEXTO: Que las conductas descritas dan cuenta certera de la comisión de sendos actos ilegales y arbitrarios, que afectan lo más esencial de los seres humanos, como la vida, la libertad, dignidad y libertad sexual, y que por su extensión y alcance trascienden al propio individuo, afectando a la humanidad toda, y por tanto se encuadran en el concepto de delito de lesa humanidad, calificación que adquiere relevancia jurídica a los fines de las defensas fiscales.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, en efecto, como ya se ha dicho, la documental rendida da cuenta que los actores fueron reconocidos como víctima de violaciones a los derechos humanos como consta en los registros de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura bajo los números 7.747, 7.746, 4.104, 4.103, 21.597 y 22.014, así como el documento emitido por el Instituto de Previsión Social relativo a los beneficios pecuniarios recibidos por los demandantes desde el año 2005, circunstancias que no fueron controvertidas por el Fisco y por el contrario, fueron corroboradas a través de su relato, antecedentes que constituyen prueba irrefutable de lo que se reclama en autos.

DÉCIMO OCTAVO: Que, Que habiéndose acreditado la existencia del hecho dañoso que se reclama de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil, corresponde pronunciarse sobre las defensas de la demandada.

DÉCIMO NOVENO: Que primeramente, el Fisco de Chile opuso la excepción de cosa juzgada respecto de los demandantes don Patricio



Foja: 1

Escalona Arriagada y don Luis Onolfo Escalona Arriagada, fundada en que estos demandantes ya ejercieron una acción por los mismos hechos de que trata la presente causa, la que fue resuelta por el 14° Juzgado Civil de Santiago en los autos Rol N° C-1890-2006, caratulada “Salgado Salgado y otros con Fisco de Chile”, en la que se dictó sentencia definitiva rechazando la demanda del actor, con fecha 05 de julio de 2011, la que apelada, fue confirmada por la Iltna. Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 10 de enero de 2014 en el Rol de Ingreso Corte N° 7649-2011. Finalmente, la Excma. Corte Suprema conociendo del recurso de casación interpuesto por los demandantes, lo rechazó con fecha 19 de noviembre de 2014.

Añadió que en este proceso los demandantes Escalona Arriagada, dedujeron la acción indemnizatoria por daño moral en contra del Fisco de Chile, por la supuesta responsabilidad extracontractual de este por los apremios ilegítimos o torturas que habría sufrido en manos de agentes del Estado, mismos hechos que fueron objeto de la causa ya señalada, por lo que concurren los requisitos de la excepción de cosa juzgada, pues la causa primogénita se dictó sentencia de término que acogió la excepción de prescripción opuesta por el Fisco de Chile, encontrándose la sentencia ejecutoriada.

En derecho se asiló en las normas de los artículos 175 y 177 del Código de Procedimiento Civil.

VIGÉSIMO: Que la institución de la cosa juzgada o de la *res iudicata*, ha sido definida como “La autoridad y eficacia de las sentencias firmes o ejecutoriadas que importan su inimpugnabilidad y eventualmente su coercibilidad” (Eduardo Couture. “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”, Editorial Depalma, Tercera Edición (Póstuma), Buenos Aires, 1966, p. 400).

El Profesor Mario Casarino Viterbo ha sostenido que la mentada excepción es el efecto que producen determinadas resoluciones judiciales, en virtud del cual no puede volver a discutirse ni pretenderse la dictación de un nuevo fallo entre las mismas partes y sobre la misma materia que fue objeto del fallo anterior (Mario Casarino Viterbo. Manual de Derecho Procesal. Editorial Jurídica, año 2007, Tomo III, p. 125 y 128).

De este concepto, se deriva el elemento que constituye su esencia como una institución del derecho, que es la característica propia de sentencias firmes o ejecutoriadas, que impide volver a revisar situaciones jurídicas consolidadas o resueltas.

Asimismo, se ha señalado que la referida excepción tiene lugar cuando concurren entre dos litigios entre las mismas partes, seguidos ante el mismo o diverso tribunal, siempre que versen sobre igual objeto pedido y con demandas basadas en la misma causa de pedir, encontrándose una de las causas con una sentencia de término firme o ejecutoriada.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil dispone que: “Las sentencias definitivas o interlocutorias



Foja: 1

firmes producen la acción o la excepción de cosa juzgada”, agregando el inciso primero del artículo 177 del mismo cuerpo legal que: “La excepción de cosa juzgada puede alegarse por el litigante que haya obtenido en el juicio y por todos aquellos a quienes según la ley aprovecha el fallo, siempre que entre la nueva demanda y la anteriormente resuelta haya: 1° Identidad legal de personas; 2° Identidad de la cosa pedida; y, 3° Identidad de la causa de pedir. Se entiende por causa de pedir el fundamento inmediato del derecho deducido en juicio”.

Así las cosas, los requisitos para que se configure la excepción de cosa juzgada son la existencia de una sentencia definitiva firme o ejecutoriada dictada en un proceso previo y que entre ambos juicios exista la denominada triple identidad: la identidad legal se refiere a que en ambos juicios deben figurar las mismas partes y en la misma calidad; la identidad de cosa pedida implica que ambos juicios tengan el mismo objeto, entendiéndose éste como el beneficio jurídico que en él se reclama, el que se puede determinar examinando la parte petitoria de sus libelos de demanda; y la causa de pedir, esto es, el fundamento inmediato del derecho deducido en juicio, referido al hecho jurídico o material que sirve de fundamento al derecho que se reclama.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que se tuvo a la vista la sentencia definitiva y complementaria dictada en la causa Rol C-1890-2006 del 14° Juzgado Civil de Santiago, confirmada por la I. Corte de Apelaciones de Santiago, instrumentos que dan cuenta de que se rechazó la demanda de indemnización de perjuicios por los causados a diferentes víctimas de crímenes de lesa humanidad, acción que fue incoada por diferentes demandantes, entre los que figuran los actores de autos, don Patricio Escalona Arriagada y don Luis Onolfo Escalona Arriagada, detenidos el 16 de septiembre de 1973, pretendiendo que se condenara al Fisco de Chile a resarcir los perjuicios morales ocasionados ascendentes a \$150.000.000, habiéndose dictado sentencia de término que declaró prescrita la referida acción.

VIGÉSIMO TERCERO: Que conforme con lo anterior, fluye que en el caso de autos la triple identidad aludida en las consideraciones precedentes se configura plenamente, desde que la pretensión de los demandantes Escalona Arriagada en la acción de autos y la pretérita es la misma, la que se sustenta en ambos casos en unos mismos hechos.

Así las cosas, habiéndose emitido un pronunciamiento respecto del objeto de la pretensión de la demandada, resulta improcedente que este Tribunal vuelva a pronunciarse sobre la cuestión ya decidida, por lo que se acogerá la excepción de cosa juzgada, respecto a los actores referidos.

VIGÉSIMO CUARTO: Que, en virtud de lo anterior, se omitirá pronunciamiento respecto de los restantes puntos discutidos en este juicio respecto a los demandantes Escalona Arriagada, por ser incompatibles con lo que se resolverá.



VIGÉSIMO QUINTO: Que, luego, respecto a los demás demandantes y respecto a la excepción de la demandada invocada como excepción de “*reparación satisfactiva*”, cabe señalar que, de acuerdo con la información emitida por el Instituto de Previsión Social, los demandantes han recibido beneficios pecuniarios por parte del Estado por el hecho de haber sido calificado como víctima de violaciones a los derechos humanos, percibiendo diferentes sumas de dinero.

Sobre este punto, huelga precisar al respecto que la Ley N° 19.123, que crea la Corporación Nacional de Reparación y Conciliación, establece una pensión de reparación y otorga otros beneficios en favor de las personas que ahí señala, dicho cuerpo legal ha establecido medios voluntarios a través de los cuales el Estado Chileno ha intentado reparar los daños ocasionados a las personas declaradas víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política, pero sin que deba entenderse una supuesta incompatibilidad entre estos resarcimientos y aquellos que legítimamente y por la vía jurisdiccional pretendan las víctimas.

VIGÉSIMO SEXTO: Que, en este sentido, el propio artículo 4° de la citada ley dispone que: “*en caso alguno la Corporación podrá asumir funciones jurisdiccionales propias de los Tribunales de Justicia ni interferir en procesos pendientes ante ellos. No podrá, en consecuencia, pronunciarse sobre la responsabilidad que, con arreglo a las leyes, pudiere haber a personas individuales*”, lo que deja de manifiesto el pleno resguardo a la garantía constitucional de acudir a los tribunales de justicia cuando se estime que existe un daño que no ha sido reparado íntegramente.

En consecuencia, se concluye que aun cuando los actores son beneficiarios, las mencionadas leyes en parte alguna establecieron una incompatibilidad entre los beneficios que otorga y las indemnizaciones de perjuicios establecidas en sede judicial.

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que asimismo, los medios voluntarios asumidos por el Estado y fijados en la ley singularizada, en modo alguno importan una renuncia o prohibición para que las víctimas acudan a la sede jurisdiccional a fin de que ésta, por los medios que autoriza la ley, declare la procedencia de una reparación por daño moral, en consecuencia, los beneficios establecidos en las Leyes 19.123, 19.992 y 19.980 no resultan incompatibles con la reparación material del daño moral, cuya cuantía y para el caso que sea procedente será determinada en este juicio.

VIGÉSIMO OCTAVO: Que, en consecuencia, la acción de indemnización por daño moral impetrada, en caso alguno resulta incompatible con los beneficios que han recibidos los demandantes, a cualquier título y en cualquier momento, de manera tal que se rechazará la excepción alegada de reparación satisfactiva.

VIGÉSIMO NOVENO: Que seguidamente, con respecto a la excepción de *prescripción extintiva* de la acción incoada, planteada por la demandada, vale tener presente que el hecho que motiva esta acción, es de



Foja: 1

aquellos que la doctrina y tribunales superiores de justicia reconoce como graves crímenes de lesa humanidad, tal y como lo establece los Convenios de Ginebra del año 1949, toda vez que estos hechos y especialmente los descritos en el motivo 14° ocurrieron en un contexto de excepción a nuestra democracia, período en que se vulneraron de manera grave, sistemática y masivamente los derechos humanos de las personas oponentes al régimen de entonces o a simples civiles que no adherían a ningún movimiento político, con el único fin posible de amedrentar al resto de la población civil, todo ello cometido por agentes del Estado o por civiles amparados por éste.

TRIGÉSIMO: Que cabe precisar que la acción indemnizatoria que se deduce se encuentra sustentada en las torturas acreditadas que ha sufrido el actor por el Estado Chileno con enorme poder de coerción y uso de fuerza, vulnerándose con aquello lo dispuesto en el artículo 5.2 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, norma última que establece que nadie debe ser sometido a torturas ni a tratos crueles inhumanos o degradantes que así si bien la acción indemnizatoria tiene un contenido patrimonial obedece a índole humanitaria proveniente de los derechos de todos ser humano reconocidos en el tratado internacional indicado, que prima de acuerdo a las normas de derecho interno en específico al artículo 2497 del Código Civil.

TRIGÉSIMO PRIMERO: Que por otro lado sustenta la tesis de inaplicabilidad de la norma del Código Civil antes mencionada por el artículo 2° de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos que obliga a los estados parte a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades y el artículo 5° de la Constitución Política de la República que reconoce como limitación a la soberanía el respeto de los derechos esenciales que emana de la naturaleza humana y la obligación del mismo de promover dichos derechos fundamentales.

TRIGÉSIMO SEGUNDO: Que en efecto, ya la jurisprudencia se ha pronunciado en el sentido que la presente acción civil deriva justamente de hechos tipificados como crímenes de lesa humanidad los cuales no prescriben, por lo que resultaría incoherente entender que la acción de reparación está sujeta a normas de prescripción, puesto que ello atenta los principios del Derecho Internacional que establecen la obligación permanente del Estado de reparar a las víctimas de estos crímenes considerados de los más atroces, tal como se establece en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, de fecha 23 de marzo de 1976, Parte III, artículo 9, numerando quinto, y la Resolución Aprobada 56/83 de la Asamblea General de Las Naciones Unidas, de fecha 28 de enero 2002, sobre Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, en especial su capítulo segundo; y teniendo presente especialmente que ambas acciones se sustentan en el mismo hecho ilícito.



TRIGÉSIMO TERCERO: Que, dado que los Derechos Humanos reconocidos en la Convención son inherentes al ser humano durante toda la existencia de éste, no es posible sostener a juicio de esta sentenciadora que un Estado pretenda desconocer la reparación necesaria y obligatoria por el mero transcurso de éste, ya que ello significaría desconocimiento del Derecho Humano conculcado.

TRIGÉSIMO CUARTO: Que sustenta lo anterior el artículo 131 del Convenio de Ginebra que sostiene que ninguna parte contratante podrá exonerarse, ni exonerar a otra parte contratante, de las responsabilidades en que haya incurrido ella misma u otra parte contratante a causa de las infracciones previstas en el artículo 130 en el que se incluye la tortura o tratos inhumanos.

Por lo demás, el que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad establezca en su artículo 4° la imprescriptibilidad de la acción penal a los crímenes mencionados en el artículo 1 entre otros, esto es los de lesa humanidad no conlleva necesariamente la exclusión de la imprescriptibilidad de la acción civil, máxime considerando el contexto del preámbulo de la convención en análisis, en especial aquellos de los párrafos 3, 4, 6 y 7.

TRIGÉSIMO QUINTO: Que de otro lado, debe tenerse presente que no nos encontramos frente a una acción de indemnización de perjuicios “común” que derive de relaciones contractuales o extracontractuales propias del derecho interno, sino que como se dijo, nos encontramos ante una acción que se sustenta en situaciones de carácter humanitaria y que por lo tanto debe sujetarse a normas y principios y las reglas internacionales que conforman el *ius cogens*, propias del Derecho Internacional; así y de acoger la tesis planteada por la demandada en este punto, resultaría una grave infracción a las obligaciones internacionales que ha contraído nuestro Estado, es así que habiendo ratificado Chile la Convención de Viena en 1980, la que en su artículo 27 establece que un Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales, como por ejemplo -y como se ha venido señalando- la de reparación, norma, que por lo demás, según nuestro ordenamiento interno tiene rango constitucional de acuerdo al artículo 5° de la Constitución Política del Estado, por lo que contrariar la norma mencionada, sería incluso infringir a nuestro propio sistema jurídico.

TRIGÉSIMO SEXTO: Que por otra parte el artículo 2332 del Código Civil señala que: “*las acciones que concede este título por daño o dolo, prescriben en cuatro años, contados desde la perpetración del acto*”; el artículo 2514 señala que: “*la prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo, durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones. Se cuenta este tiempo desde que la obligación se haya hecho exigible*”; finalmente el artículo 2515 de igual cuerpo legal señala que el tiempo es de 5 años para las acciones ordinarias.



TRIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, en ese contexto, el estatuto del derecho privado chileno regula relaciones entre particulares, regidas por los principios de la autonomía de la voluntad y en plano de igualdad, cuestión inaplicable al caso *sub-lite*, donde se busca regular y sancionar en el ámbito de derecho público, relaciones verticales del Estado con los particulares, determinando las responsabilidades que éste tenga por las afectaciones de derechos por parte de sus agentes.

TRIGÉSIMO OCTAVO: Que, resulta inconcuso que tratándose del resarcimiento de las transgresiones a los Derechos Humanos, la fuente de responsabilidad civil o el estatuto aplicable, no puede encontrarse en nuestro Código Civil, toda vez que las normas de regulación y protección de tales derechos son posteriores a nuestra codificación, y las allí contenidas no fueron concebidas por Bello para la solución de problemas contemporáneos, como el de marras, para los cuáles ha devenido el desarrollo de nuevas concepciones al amparo del Derecho Internacional, el que incorporado en virtud del artículo 5º de nuestra Constitución Política, resulta absolutamente vinculante y obligatorio.

TRIGÉSIMO NOVENO: Que así, en el caso *sub-lite*, la detención y prisión ilegal, golpes variados y culatazos, los diversos métodos de tortura que les fueron proferidos a los demandantes referidos, constituyen en el hecho actividades ilegítimas llevadas a cabo al margen de la juridicidad y constitucionalidad, por ende, se trata de un crimen de lesa humanidad, que de acuerdo al Derecho Internacional a través de normas de *Ius Cogens*, del Derecho Consuetudinario y Derecho Convencional donde se ha declarado su imprescriptibilidad, sin distinción alguna de si ello alude a las acciones penales y civiles, sin que pueda estimarse dicha omisión como suficiente para interpretar dicho cuerpo normativo en contra de sus beneficiarios naturales, lo que no sería sino contrariar su historia fidedigna.

CUADRAGÉSIMO: Que, en efecto, el artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que cuando haya violación de un derecho o libertad habrá derecho al pago de una justa indemnización a la parte lesionada, y el artículo 1.1 trata de las obligaciones de respeto y garantía por parte de los Estados parte de las disposiciones contenidas en tal pacto, relativas al respeto y protección de derechos fundamentales.

CUADRAGÉSIMO PRIMERO: Que así no resulta posible aplicar las normas del Código Civil y declarar prescritas acciones indemnizatorias ordinarias emanadas de violaciones a derechos fundamentales, por ser contrarias al orden jurídico internacional, que traducido en Convenios y Tratados y por clara disposición constitucional, son vinculantes para Chile, como ha reconocido y declarado abundante jurisprudencia de nuestros Tribunales Superiores de Justicia, entre otros, en el homicidio de Fernando Vergara, los denominados caso Liguña, Caravana de la Muerte -capítulo



Foja: 1

San Javier-, Secuestro y Desaparición de Darío Miranda Godoy y Jorge Solovera Gallardo y secuestro y desaparición de Sergio Tormen Méndez.

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO: Que los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República establecen los principios de igualdad ante la ley de gobernantes y gobernados, siendo responsables tanto de sus acciones como de sus omisiones, asimismo el artículo 4º de la Ley 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado, señala que éste será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado, normas que en conjunto con los tratados internacionales vigentes en Chile, reafirman el deber de responder y resarcir los daños, normas que carecerían de toda validez y operatividad de aplicarse las reglas y plazos del derecho común a materias de tan alto dolor y conocimiento público, como son las violaciones a los Derechos Humanos.

CUADRAGÉSIMO TERCERO: Que, por lo señalado precedentemente, esta sentenciadora estima que los cómputos de los plazos establecidos en los artículos 2332 y 2515 no son aplicables en la especie, entran en directa contradicción con normas internacionales, normas de *Ius Cogens*, el Derecho Consuetudinario y el Derecho Constitucional, desechándose así la prescripción invocada por la demandada.

CUADRAGÉSIMO CUARTO: Que, así las cosas, desechadas que fueren las defensas fiscales, y establecida la existencia del ilícito, corresponde abocarse a la determinación de los daños y la relación de causalidad, para lo cual la parte demandante acompañó sendos informes psicológicos, elaborados por el Ministerio de Salud, a través del Programa PRAIS y por el Psicólogo clínico y Magíster Psicopatología don Rodrigo Adolfo San Martín Gárate, por lo que corresponde proceder a su análisis.

CUADRAGÉSIMO QUINTO: Que en el informe de don Segundo Nicanor Campillay Sepúlveda, en el acápite “Descripción de los eventos represivos traumáticos” el profesional incluye el relato que este le entrega, apreciando que durante la entrevista realizada desarrolló un mecanismo de evasión variable de estímulos asociados al trauma, realizando esfuerzos para evitar pensamientos, sentimientos o conversaciones sobre el suceso traumático, actividades y lugares que producen recuerdos del trauma, no contando con una red de contención con quien pueda conversar lo sucedido.

El resultado diagnóstico es un daño psíquico severo. Signos, síntomas y vivencias posteriores a su paso por la prisión y tortura, que sumado al deterioro irreparable de la relación familiar, dan cuenta de un menoscabo en su salud y bienestar integral, padeciendo un estrés postraumático, logrando afectar incluso a su familia y entorno con consecuencias al día de hoy, por lo que los síntomas son también de carácter fisiológico, repercutiendo negativamente en su salud mental y física, sin descartar de



Foja: 1

plano la posibilidad que futuras afecciones físicas de índole psicosomático puedan estar relacionadas a dicha experiencia.

CUADRAGÉSIMO SEXTO: Que en el informe del demandante don Carlos Campillay Sepúlveda, a quien se le realizó la misma evaluación, el profesional sostiene que en el relato entregado por aquel, éste desarrolló un mecanismo de evasión persistente de estímulos asociados al trauma, realizando esfuerzos para evitar pensamientos, sentimientos o conversaciones sobre el suceso traumático, actividades y lugares que producen recuerdos del trauma. A partir de ello, hoy no cuenta con una red de contención con quien pueda conversar lo sucedido.

El profesional destaca que la existencia del Sr. Carlos Campillay resultó marcada por un daño psíquico severo. Signos, síntomas y vivencias posteriores a su paso por la prisión y tortura, sumado al deterioro irreparable de la relación familiar, dan cuenta de un menoscabo en su salud y bienestar integral, logrando afectar incluso a su familia y entorno con consecuencias al día de hoy y que es posible señalar que los síntomas son también de carácter fisiológico, repercutiendo negativamente en su salud mental y física, sin descartar de plano la posibilidad que futuras afecciones físicas de índole psicosomático puedan estar relacionadas a dicha experiencia.

CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO: Que luego el informe psicológico de don Roberto del Tránsito Romero Veliz, da cuenta que este se encontraba trabajando al momento del Golpe de Estado. Luego describe los hechos narrados por el actor, que le produjo las siguientes consecuencias: En lo económico: pérdida de trabajo, en lo social: pérdida de amigos familiares, discriminación y desarticulación de redes de apoyo y en la salud, neurosis depresiva, problemas óseos, dolores musculares, pérdida de memoria, arritmia, cefaleas, alteración del ánimo frente a estímulos externos, sintomatología depresiva y dificultad en el control de impulsos.

Como resultados indica que el actor tiene un daño emocional y físico asociado a causa del evento represivo que ha permanecido en él y su familia, con relación a las detenciones, torturas y allanamientos ocurridos durante la dictadura militar.

CUADRAGÉSIMO OCTAVO: Que finalmente, en cuanto al informe psicológico de don Vladimir Max Salamanca Morales, puntualiza que su experiencia la vivió con 15 años, siendo golpeado y amenazado reiteradamente, así como otras vejaciones sufridas por 22 días, situación que se reiteró un año después, donde fue detenido junto a su padre, llevado ante miembros de la DINA, donde fueron torturados con golpes, electricidad e interrogados continuamente por 44 días, para al ser liberado, comprobar que sus hermanos habían sido detenidos, encontrándose hasta hoy en calidad de detenidos desaparecidos.

Describe el psicólogo, en relación al daño e impacto asociado que al verse afectado él y toda su familia, se tradujo en graves consecuencias en



Foja: 1

distintas esferas de su vida, impactando drásticamente su integridad física, psíquica, emocional y relacional, lo que truncó las posibilidades de una adecuada autorrealización personal, laboral, intelectual, relacional esperable para un joven de su edad y que la experiencia de la detención, fue acompañada de otros eventos estresantes, como la tortura en este caso y que es posible identificar que el entrevistado estuvo expuesto a estrés extremo, razón por la cual una secuela irreversible del TEPT es la presencia de una Transformación Persistente de la Personalidad Tras Experiencia Catastrófica, muy común en personas que le ha tocado vivir experiencias de trauma extremo, así concluye que los diversos efectos represivos acontecidos al padre y familia de don Vladimir, afectaron la vida del entrevistado configurando un quiebre importante en su proyecto vital y un daño irreparable en su vida.

CUADRAGÉSIMO NOVENO: Que así, respecto de los demandantes don Segundo Nicanor Campillay Sepúlveda, don Carlos Campillay Sepúlveda, don Roberto Del Tránsito Romero Veliz y don Vladimir Max Salamanca Morales, ha quedado plenamente establecida la existencia del ilícito y su relación causal con los daños y perjuicios invocados, a la luz de los informes psicológicos que fueran reseñados.

Así, los perjuicios sufridos por los actores, en su diversa magnitud, aparecen como consecuencia natural y lógica de todo lo vivido, daño moral en toda su extensión, desde el dolor físico -derivado de los golpes y torturas- y aflicción por las amenazas y angustias ante la incertidumbre y ver lo que le ocurría a las demás personas afectadas, sino que además un estado de vulnerabilidad interna con efectos permanentes; hechos que indudablemente afectan de sobremanera la vida de cualquier persona, tienen como efecto ordinario y natural, una conmoción interna y afectación a la salud física, síquica y emocional, alternaciones a la vida que se estima como normal, y acarrear consecuencias psíquicas permanentes, provocando entre otras cosas, trabas para la estabilidad emocional, familiar y social.

Que entonces, no cabe sino dar lugar a la acción indemnizatoria solicitada por los actores, aunque no por la suma pedida en la demanda, para lo cual se tendrá en consideración no sólo la situación especial de cada uno de los actores, sino también las indemnizaciones fijadas en otros casos de víctimas de violaciones a los Derechos Humanos.

QUINCUAGÉSIMO: Que reconociendo desde luego las falencias que tiene una indemnización en dinero para los hechos vivenciados por los actores, que solo por la vía de la compensación se pretende morigerar en su esfera mas íntima los efectos y secuelas de los mismos, se tomara en cuenta el tiempo de privación de libertad y la descripción de los hechos realizadas, así como lo informado por los profesionales sobre el alcance y afectación individual.

Así, en lo que se refiere a don Segundo Nicanor Campillay Sepúlveda, se considerará la duración de la privación de libertad, 15 días, su



Foja: 1

edad a la época de acontecimiento de los hechos (17 años), los golpes, aplicación de corriente y condiciones en que fue detenido, así como las secuelas que produjeron en el desarrollo de su vida, llevan a esta jueza a regular prudencialmente el quantum indemnizatorio en la suma de \$20.000.000.- (veinte millones de pesos), considerando que no pueden obviarse los montos que en similares circunstancias se han establecido, baremo que conduce a la determinación de la suma señalada.

Don Carlos Campillay Sepúlveda, fue detenido por un total de 11 días, recibiendo culatazos, patadas, combos, torturas con aplicación de corriente entre otras, e intensos interrogatorios, con escasa alimentación y acceso a higiene y aseo personal, lo que le afectó considerablemente, por lo que se fija el quantum indemnizatorio en la suma de \$8.000.000.- (ocho millones de pesos).

Don Roberto del Tránsito Romero Veliz, estuvo detenido por 22 días, siendo víctima de golpes de pies y manos, amenazado, vejado, torturado mediante aplicación de corriente en diferentes partes del cuerpo, hechos que llevar a determinar el monto de la indemnización en la suma de \$15.000.000.- (quince millones de pesos)

QUINCUAGÉSIMO PRIMERO: Que, mención aparte, respecto del demandante don Vladimir Max Salamanca Morales, quien a la época de acontecimiento de los hechos relatados sólo tenía 15 años, y además estuvo detenido en dos ocasiones, por un periodo total de 66 días, esta sentenciadora tendrá en especial consideración que fue sometido a tratos vejatorios psicológicos y físicos a una edad especialmente vulnerable, recibiendo golpes reiterados, simulacros de fusilamiento y amenazas, así como sometido a torturas con aplicación de electricidad para obtener información respecto de su familia, para posterior a ser liberado, ser sujeto igualmente de persecuciones, intimidaciones y amedrentamientos.

Los tratos de los que fue objeto lo limitaron especialmente en el ámbito educacional y físico, al perder piezas dentales y movilidad de un brazo que pudo recuperar en un 80% aproximadamente, así también en el aspecto familiar, pues su núcleo de disgregó, teniendo incluso dos hermanos, hasta el día de hoy en calidad de detenidos desaparecidos.

Así, reconociendo desde luego las limitaciones y falencias de una indemnización sólo por vía de compensación, a falta de mejores antecedentes, llevan a esta juez a regular prudencialmente el quantum indemnizatorio en la suma de \$50.000.000.- (cincuenta millones de pesos), considerando que no pueden obviarse los montos que en similares circunstancias se han establecido, baremo que conduce a la determinación de la suma señalada.

QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO: Que, atendido el carácter declarativo del proceso, la suma ordenada pagar devengará intereses y reajustes, una vez que se encuentre firme o ejecutoriada y hasta su pago efectivo.



«RIT»

Foja: 1

QUINCUAGÉSIMO TERCERO: Que atendido el mérito de lo razonado anteriormente y el hecho que la demandada no controvertió sustancialmente los hechos, cada parte pagará sus costas.

QUINCUAGÉSIMO CUARTO: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, y estimándose que la demandante litigó con motivo plausible, cada parte pagará sus costas.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 144, 160, 170, 175, 177, 342, 343, 426, 748 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; artículos 2332 y 2497 del Código Civil; Ley N° 19.992, ley N° 19.123; artículo 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo 14.1 de la Convención sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes; artículos 1.1, 2 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; los Principios 15, 18 y 20 de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, se declara:

I.- Que se **acoge la excepción de cosa juzgada** respecto de don Patricio Escalona Arriagada y don Luis Onolfo Escalona Arriagada, desechándose la demanda a su respecto.

II.- Que **se acoge la demanda** condenándose al Fisco de Chile a pagar a don Segundo Nicanor Campillay Sepúlveda, la suma de \$20.000.000.- (veinte millones de pesos); a don Carlos Campillay Sepúlveda, la suma de \$8.000.000.-; a don Roberto Del Tránsito Romero Veliz, la suma de \$15.0000.000.-, y a don Vladimir Max Salamanca Morales, la suma de \$50.000.000.- por concepto de indemnización de perjuicios por daño moral, derivados de los hechos asentados en autos,

III.- Que las sumas que se ordena pagar deberán serlo con los reajustes e intereses que se indican en el motivo 52°.

IV.- Que cada parte pagará sus propias costas.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Dictada por Doña Rocío Pérez Gamboa, Jueza Titular.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, treinta de agosto de dos mil veinticuatro**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XKSXPXJHXR